

27 de enero: Huelga General por la solidaridad y el empleo

Tras varios meses de arduas negociaciones, no fue posible alcanzar ningún acuerdo. Lo que se llamó, desde la campaña de las elecciones generales, "pacto por el empleo", ha ido transformándose desde septiembre en un simple intento de que los sindicatos avalaran con su firma una política basada en la insolidaridad, la desregulación laboral y la pérdida de derechos por parte de los trabajadores.

Frente a la presentación de alternativas, por parte de los sindicatos, basadas en un proyecto económico para salir de la crisis creando empleo, el Gobierno ha contestado con la reiteración de una política ya fracasada y gravemente lesiva para los trabajadores. Frente al intento serio de negociación, el Gobierno ha impuesto por decreto, sin apenas guardar las formas, unas medidas ya decididas y acordadas de antemano con la derecha nacionalista.

Las últimas decisiones gubernamentales sobre la llamada reforma del mercado laboral han terminado con cualquier posibilidad de acuerdo. Resulta difícil explicar cómo puede crearse empleo mediante el mecanismo de cerrar la entrada al mercado laboral al mismo tiempo que se abre la salida, porque, en efecto, en eso consisten las medidas adoptadas.

Desde el despido libre, individual y colectivo, hasta los planes de "empleo" para los funcionarios, en los que éstos pueden acabar en excedencia si no aceptan cualquier destino que se les adjudique, todas las medidas están orientadas a eliminar derechos laborales, reforzar el poder empresarial y de las administraciones públicas y provocar un reajuste de las plantillas de trabajadores, con el consiguiente aumento del paro.

Las repercusiones de una política semejante en todo el sector público pueden ser de una enorme gravedad, poniendo en cuestión, en el caso de la enseñanza, el proceso de extensión y desarrollo del sistema educativo que está en marcha tras la aprobación de las Leyes Orgánicas que lo desarrollan en todos sus niveles.

No se trata sólo, en esta ocasión, de combatir unas medidas antisociales, sino que ellas son la punta del iceberg de toda una política económica profundamente conservadora. A la vez que los sindicatos reiteran, pese a todo, su disposición al diálogo y al acuerdo, el Gobierno debe saber que éste no es posible en base a la agresión permanente, y que los sindicatos están decididos a impulsar un proceso continuo de movilización que se abre con la huelga general del 27 de enero.